

Sader, Emir. **América Latina en el siglo XXI.** *En publicación: Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina.* Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Julio 2006. ISBN 987-1183-41-0

Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/politica/PICdos1.pdf>

[www.clacso.org](http://www.clacso.org)

**RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO**

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

[biblioteca@clacso.edu.ar](mailto:biblioteca@clacso.edu.ar)

EMIR SADER\*

## AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI\*\*

NUNCA EN SU HISTORIA América Latina estuvo tan poblada por regímenes políticos democráticos conforme a los cánones liberales como en los inicios del siglo XXI. Después de la sustitución de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el de Vicente Fox en México, ligado al hasta entonces opositor Partido Acción Nacional (PAN); la reconversión de los movimientos guerrilleros de Guatemala y de El Salvador hacia la lucha institucional; la reconquista formal de la institucionalidad en Haití; la sustitución del régimen de Fujimori por el de Alejandro Toledo en Perú; la instauración de un proceso formal de alternancia institucional en Paraguay con el fin del gobierno del general Stroessner; y con la transición de las dictaduras militares a regímenes electorales en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, América Latina habría instaurado el reinado de regímenes políticos democráticos prácticamente en el conjunto del continente. Sólo Cuba mantendría un régimen que no se corresponde con los criterios liberales de demo-

\* Director del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Brasil.

\*\* Artículo publicado en Sader, Emir 2004 *La venganza de la Historia. Hegemonía y contra-hegemonía en la construcción de un nuevo mundo posible* (Buenos Aires: CLACSO).

cracia. Incluso el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, por más que sea acusado por la oposición de dictatorial o autoritario, se instaló conforme a las normas liberales, mediante elecciones y un conjunto de plebiscitos que aprobaron una nueva Constitución para el país.

Es como si, después de haber sido en décadas anteriores un continente de revoluciones, y de haber pasado a ser un continente de contrarrevoluciones, se impusiera una especie de síntesis equilibrada de los dos momentos bajo la forma de democracias generalizadas, que llegaron para quedarse. Regímenes apoyados y legitimados por el voto popular que, poniendo en práctica políticas con la aprobación de la mayoría de la población, expresarían la modalidad latinoamericana de inserción en el modelo de democracia liberal vigente en Estados Unidos y en Europa. Algunos autores llegaron a formular lo que sería el fin de la utopía latinoamericana, como Jorge Castañeda en su libro *La utopía desarmada* (Castañeda, 1994), y la rendición del continente al liberalismo anglosajón, prenunciando el baño de liberalismo al que fue sometido en las dos décadas posteriores.

Estas dos décadas presenciaron las mayores transformaciones concentradas de la historia latinoamericana. Esto exige un balance que posibilite no solamente entender la naturaleza de aquellos regímenes, sino también saber en qué medida permitieron el avance hacia la construcción de sociedades democráticas, para así comprender al mismo tiempo lo que es América Latina, sus problemas y sus potencialidades.

América Latina vive, de forma más clara desde la mitad de los años noventa, su peor crisis económica y social desde los años treinta. Sus economías revelan una enorme fragilidad externa y su inserción internacional presenta un bajo perfil, tanto económica como políticamente. ¿Qué relación tuvo la democracia con este cuadro? Una primera y apurada respuesta sería atribuir a esta la responsabilidad, total o parcial, por la crisis de estos regímenes. Coinciden en el tiempo su instauración o reinstauración y el surgimiento, de forma cada vez más acentuada, de los factores de crisis. De tal manera que el neoliberalismo, como política económica y como ideología, se tornó una expresión aparentemente indisociable de tales regímenes democrático-liberales. El peso de la crisis reposa, en realidad, en las políticas económicas y en la ideología que pasó a presidir los nuevos gobiernos, con efectos directos en la política.

Otra respuesta posible es considerar que estos regímenes no corresponden a democracias reales. O que tales regímenes, democráticos o no, no son compatibles con las condiciones necesarias

para la solución de la crisis del continente –visiones que discutiremos más adelante.

Resulta significativo que durante los años de ascenso y apogeo del neoliberalismo en América Latina los presidentes lograron ser electos y reelectos casi automáticamente, como aconteció de forma llamativa con Menem, Fujimori y Fernando Henrique Cardoso. Como reflejo de su fase de agotamiento y decadencia, sucedió exactamente lo contrario: los presidentes electos que no rompieron con el neoliberalismo perdieron rápidamente legitimidad, como ocurrió principalmente en el caso de Fernando de la Rúa, Sánchez de Lozada y Alejandro Toledo, y otros como Vicente Fox, Ricardo Lagos y Jorge Battle. La elección de Lula, así como la de Lucio Gutiérrez, coloca por primera vez en la presidencia a candidatos que en sus campañas electorales proponían romper con las políticas neoliberales y abrir un nuevo período histórico en América Latina.

## AMÉRICA LATINA ANTES DEL NEOLIBERALISMO

América Latina vivió tres períodos claramente diferenciados a lo largo del siglo XX: en el primero, prácticamente una extensión del siglo XIX, predominaron las economías primario-exportadoras, orientadas por las teorías del comercio internacional basadas en el concepto de ventajas comparativas. A estos modelos de acumulación correspondían regímenes políticos oligárquicos, en los cuales las distintas fracciones de las elites económicas disputaban entre sí la apropiación del estado y, a partir de allí, de los recursos de exportación y del comercio exterior en general.

Hasta principios del siglo XX, América Latina no tuvo importancia y peso significativo en el plano mundial, salvo como campo de explotación de las potencias coloniales. Ningún gran fenómeno, ni ningún gran personaje reconocido internacionalmente, tuvieron impacto en la escena internacional, ni siquiera las revoluciones de independencia que permanecieron a la sombra de la revolución norteamericana.

La transformación más importante del siglo XIX, después de la independencia, fue el ingreso de EE.UU. en el campo de las naciones imperiales con la incorporación de vastos territorios mexicanos –incluyendo California, Texas y Florida–, la guerra hispanoamericana, y la tutela que EE.UU. pasó a ejercer directamente sobre Cuba y Puerto Rico, además del diseño ya anticipado por José Martí de su proyecto hegemónico sobre el conjunto del continente, explicitado en la Doctrina Monroe.

En compensación, apenas iniciado el siglo XX, el continente reveló qué tipo de siglo lo aguardaba con la masacre de los mineros en Santa María de Iquique, en el norte de Chile, y especialmente con la Revolución Mexicana, que representó el ingreso definitivo de América Latina en la agenda de los grandes acontecimientos históricos de dimensión mundial. Su imagen se proyectó sobre todo el continente, primeramente en la cultura y el imaginario campesino, pero también en lo relativo a la posibilidad de proyectos políticos con fuerte peso de las cuestiones nacional y agraria, que por mucho tiempo determinarían la pauta política de los movimientos populares en el continente. La revolución mexicana atrajo la atención de los revolucionarios del mundo entero, relativizada solamente por el surgimiento de la revolución soviética, que planteó por primera vez la posibilidad de que un poder obrero y campesino substituyese el capitalismo por el socialismo.

Simultáneamente, el continente pasó a revelar nuevas dimensiones de sus conflictos sociales y de la constitución de nuevos sujetos políticos, como fruto del proceso de urbanización y de los momentos iniciales de los procesos de industrialización. Ejemplos de ello fueron la reforma universitaria de Córdoba, en Argentina; la fundación de los partidos comunistas; los movimientos de rebeldía de sectores de clase media, como el *tenentismo* en Brasil, el APRA en Perú y el radicalismo en Argentina, que desembocaron en la crisis de 1929 y en las distintas reacciones a la misma, al anunciar el primer gran marco de un nuevo período histórico en el continente.

En una América Latina afectada profundamente por la crisis de 1929, en prácticamente todos sus gobiernos, conservadores o progresistas, fueron sustituidos como efecto de los estremecimientos de los modelos exportadores cuestionados por la recesión internacional. Fenómenos como la rebelión campesina en El Salvador, dirigida por Farabundo Martí, la lucha antiimperialista de Sandino en Nicaragua, la “república socialista” en Chile, la “revolución de 1930” en Brasil, el movimiento semi-insurreccional que derribó la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, entre varios otros movimientos análogos, pertenecen a este tipo de movilizaciones populares que desembocaron, en varios países, en gobiernos nacionalistas, siendo Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México y Perón en Argentina, sus más conocidas expresiones.

En las décadas posteriores a la crisis de 1929, varios países del continente desarrollaron políticas sobre las que tiempo después la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) teorizaría bajo el nombre de “industrializaciones sustitutivas de importaciones”, y que posibilitaron, valiéndose del vacío dejado por la recesión en el centro del capitalismo, el avance de uno de los fenómenos económico-sociales más relevantes e innovadores del siglo XX: la industrialización –aunque atrasada y dependiente– de países de la periferia del capitalismo. Hasta entonces, la división entre el centro y la periferia del sistema camuflaba en lo inmediato aquella existente entre economías industrializadas y primario-exportadoras, entre sociedades urbanizadas y agrarias, con mecanismos evidentes de intercambio desigual entre las mismas. Desde aquel momento se forman nuevos bloques en el poder, hegemonizados por fracciones industriales de las burguesías locales, con participación, aunque subordinada, de fracciones de las clases subalternas, en general representadas por sus sectores urbanos sindicalizados.

Este proceso de industrialización permitió el surgimiento y fortalecimiento de las clases trabajadoras en varios países latinoamericanos, modificando el panorama social y político en el continente, que sentó las bases para la constitución de las primeras fuerzas políticas de las clases dominadas, centradas en el movimiento sindical, ya sea de carácter clasista o con liderazgos populistas. Basados en alianzas políticas dirigidas por proyectos nacionales, varios países del continente vivieron significativas experiencias populares, que representaron la primera gran aparición del movimiento de masas. Fue el período de mayor crecimiento económico en países como Argentina, México, Brasil, Chile y Perú, entre otros, que transformarían su fisonomía en pocas décadas, más rápidamente que en los siglos anteriores. No por casualidad los países que tenían el mayor desarrollo económico relativo y que se habían valido de forma más directa de la crisis de 1929 para implementar su proceso de industrialización –México, Brasil y Argentina– tendrían como fuerza política predominante partidos o líderes que privilegiaron la cuestión nacional sobre la cuestión de clase, dejando en un segundo plano a los partidos clasistas.

Este período comienza a agotarse con el fin de la guerra de Corea y de la “tregua” que los países imperialistas fueron obligados a conceder por la recesión y, posteriormente, por las economías de guerra impuestas con motivo de la deflagración de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esto ya se había preunciado con el cambio del escenario internacional al iniciarse la Guerra Fría, que colocó a los partidos comunistas en la ilegalidad, teniendo efectos más directos en

los países en que estos partidos tenían un papel político más importante, como Chile y Brasil, por ejemplo, pero con efectos en todos ellos, afectando particularmente las alianzas políticas y los espacios para el movimiento sindical.

El período termina finalmente a mediados de los años sesenta, conforme al proceso de internacionalización de las economías, la consolidación de las grandes corporaciones multinacionales y el estrechamiento de los espacios nacionales de acumulación. El gobierno del Frente Popular en Chile, la revolución boliviana de 1952, y el movimiento llamado *Bogotazo* en Colombia en 1948, como reacción popular al asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, son algunas de las mayores convulsiones del período, que tendrá en la Revolución Cubana su momento más importante.

El nuevo período presenciara una disputa política entre tres proyectos diferentes: la alternativa socialista en el continente introducida por la revolución cubana, el proyecto de nacionalismo militar de Velasco Alvarado en Perú, y el de la dictadura militar en Brasil. Los tres disputaban el espacio dejado por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones en el plano económico y por las crisis de los regímenes democrático-liberales, con golpes militares en varios países, especialmente en el Cono Sur latinoamericano.

Este nuevo período fue introducido por los golpes militares en Brasil y Bolivia en 1964, seguidos por otros similares en Argentina en 1966 y 1976, en Bolivia nuevamente en 1971, y en Chile y Uruguay en 1973. En poco más de una década, los regímenes políticos democrático-liberales de la subregión fueron todos reducidos a dictaduras militares orientadas por la doctrina de seguridad nacional. En el caso brasileño se mantenía todavía una política de desarrollo industrial, pero con un carácter ya fuertemente antipopular –por la represión de los salarios y los sindicatos– y con un rol hegemónico de las corporaciones multinacionales por la internacionalización de la economía. Sin embargo, a partir del pasaje del capitalismo a su largo ciclo recesivo a mediados de los años setenta y de la crisis de la deuda de los países latinoamericanos en 1980-1981, las economías del continente entraron en conjunto en una fase recesiva, en la cual se generaron las condiciones para la adhesión a los modelos neoliberales, cerrándose definitivamente el período “desarrollista” y generándose consensos en torno al combate contra la inflación y la “estabilidad monetaria”, motores del neoliberalismo en América Latina.

La transición al período siguiente se da con la “crisis de la deuda”, desatada en 1980, que engendró déficit en las balanzas de

pagos que tornaron inviables los proyectos de desarrollo para la región. La década del ochenta fue denominada la década perdida, básicamente porque los gobiernos se dedicaron sobre todo a lograr saldos comerciales que disminuyesen los datos de aquellos déficits. Las hiperinflaciones englobadas en ese proceso serían referencias fundamentales para que los objetivos de desarrollo fuesen sustituidos por los de estabilidad monetaria, palanca de enraizamiento del neoliberalismo en América Latina.

## EL NUEVO CONSENSO: EL COMBATE A LA INFLACIÓN

América Latina fue cuna y laboratorio de experiencias del neoliberalismo. Fue en el combate a la hiperinflación boliviana que Jeffrey Sachs pudo testear los modelos de estabilidad monetaria que después fueron exportados a países del Este europeo. Fue en el Chile de Pinochet que los economistas de la Escuela de Chicago, bajo la dirección de Milton Friedman, encontraron las condiciones políticas propicias para experimentar sus propuestas de apertura económica y desregulación.

El combate a la inflación fue la piedra angular de la construcción del modelo hegemónico neoliberal. Los diagnósticos que llevaron a las políticas de desregulación fueron aquellos que atacaron a la inflación como la fuente de los problemas que condujeron a la estagnación económica, al deterioro de los servicios sociales y de la infraestructura del estado, y al empobrecimiento generalizado de la población. Los argumentos del “impuesto inflacionario” y del ataque al accionar del estado, cuyo déficit sería la fuente de la inflación, gozaron de gran aceptación y demostraron, en el momento de su aplicación, su eficacia inmediata.

Rápidamente se propagó el efecto de tales laboratorios, multiplicado por la nueva moda liberal difundida por el dúo Reagan-Thatcher, reproducida también a gran velocidad por los órganos de divulgación internacionales y retomada localmente por los medios de comunicación y por los cuadros económico-tecnocráticos del gran capital. Chile pasaba por un proceso de “modernización” económica, Bolivia conseguía superar la hiperinflación –los resultados se contraponían a los precios que eran pagados por esas amargas medicinas.

Chile volvía a ser un país exportador, con su economía basada en las “ventajas comparativas” del cobre, las frutas, la madera y la pesca, abandonando su nivel intermediario de desarrollo industrial apoyado en el Pacto Andino, y volviendo a importar masivamente productos industrializados. En el plano social, habiendo sido uno de los



países con los mejores índices, junto con Costa Rica y Uruguay, ahora se aproximaba peligrosamente a los índices brasileños.

Bolivia pagó con el desmantelamiento de su economía minera el control de la inflación, desarticulando sus minas y dejando en el desempleo a decenas de miles de trabajadores. La exportación de gas a Brasil y Argentina sustituyó esa actividad económica, al mismo tiempo que se expandió la economía cocalera. Una parte de los líderes mineros se trasladó al campo, transmitiendo la experiencia del movimiento sindical a la lucha de los cocaleros.

Se dio entonces con gran rapidez la proliferación de lo que ya se había convenido en llamar Consenso de Washington, una especie de pasaje obligatorio de las economías de todos los países del mundo, para posicionarse en condiciones de retomar el crecimiento económico. La segunda etapa del neoliberalismo –que se articuló con la redemocratización y que contó con la conversión de la socialdemocracia a este modelo– se inició en Europa occidental con el viraje del gobierno de François Mitterrand en 1983 y fue reproducida rápidamente en América Latina, siendo su expresión emblemática la conversión neoliberal del peronismo. Después del fracaso del gobierno de Raúl Alfonsín, Carlos Menem realizó una campaña electoral de acuerdo a los moldes clásicos del peronismo, centrada en un *shock* productivo. Sin embargo, inmediatamente después de las elecciones llamó a los más férreos adversarios históricos del peronismo para aplicar las políticas liberales de la Escuela de Chicago en Argentina.

Si en Europa occidental el carácter hegemónico del neoliberalismo estaba dado por la adhesión de la socialdemocracia, en América Latina aquellos que personificaban el estatismo, el regulacionismo y el redistribucionismo fueron corrientes tales como el peronismo, el PRI mexicano y la Acción Democrática (AD) en Venezuela. Uno tras otro, de modo similar a la sucesión de adhesiones europeas que siguieron a Mitterrand y Felipe González, esos partidos fueron adoptando los modelos de ajuste fiscal, estabilidad monetaria, desregulación, privatización y apertura de las economías al mercado internacional, con políticas que reproducían mecánicamente los “consensos” recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En América Latina, los gobiernos de Menem en Argentina, Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en México, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, y Fernando Henrique Cardoso en Brasil, reproducían la conversión de fuerzas de centro-izquierda a los modelos neoliberales.

La etapa siguiente fue inaugurada por la crisis mexicana de 1994 y definitivamente instaurada por la crisis asiática de 1997, seguida por la rusa de 1998 y la brasileña de enero de 1999. El pasaje del capitalismo norteamericano a un nuevo ciclo recesivo desde el año 2001 otorgó a esta etapa un acentuado tono de límite, de extenuación del potencial hegemónico, con efectos previsiblemente duros sobre la economía mexicana –caso testigo de la segunda mitad de los años noventa– y sobre el resto del continente. La crisis argentina puso en cuestión la política de paridad cambiaria, así como la dolarización en Ecuador y en El Salvador, evidenciando la necesidad de un nuevo horizonte para proveer nuevo oxígeno al neoliberalismo, cuando incluso la propia tercera vía –de Ricardo Lagos en Chile, Fernando de la Rúa en Argentina, Vicente Fox en México– se volvió impotente para ello, imposibilitada de actuar como lo habían hecho los gobiernos de Clinton y Blair en EE.UU. e Inglaterra.

Los fracasos de Fernando de la Rúa, Sánchez de Lozada y Alejandro Toledo confirmaron cómo los tiempos habían cambiado en América Latina. El mantenimiento de la política económica de ajuste fiscal –con las promesas de reconquistar el desarrollo económico, crear empleos y privilegiar las políticas sociales– fracasó en todos los casos. Si anteriormente los candidatos que pusieron en práctica estas políticas eran electos y reelectos, como fueron los casos de Menem, Fujimori y Fernando Henrique Cardoso, ahora, por el contrario, el mantenimiento de tales políticas condenaba al fracaso, ya que estas habían agotado su efecto estabilizador, eran incapaces de retomar el desarrollo, y se tornaron fuente de desequilibrio económico y financiero. De aparentes soluciones para la crisis, las políticas de ajuste fiscal se volvieron en sí mismas fuentes de crisis, por los desequilibrios en las balanzas de pagos y la multiplicación del endeudamiento público, en condiciones internacionales que ya no favorecían más la atracción de capitales. El continente entraba de lleno en su peor crisis, la más extensa y profunda desde los años treinta.

## LA CRISIS LATINOAMERICANA

En este marco, ¿en qué consiste la crisis latinoamericana actual? Básicamente, en que aproximadamente dos décadas de programas de estabilización monetaria, hegemonía neoliberal y predominio de la acumulación financiera no llevaron al continente –ni siquiera a algunos países– a retomar el desarrollo, recuperar su atraso en la carrera

tecnológica, estabilizar y extender los regímenes democráticos, disminuir los problemas sociales y proyectar sociedades pujantes y creativas tecnológica y culturalmente.

Al contrario, el continente vive la profunda y extensa resaca de los remedios neoliberales, con efectos colaterales generalizados. El cuadro actual nos remite al peor de los escenarios posibles: estados debilitados en el plano externo y con cada vez menor capacidad de acción en el plano interno; sociedades cada vez más fragmentadas y desiguales, con amplios sectores excluidos de sus derechos básicos, comenzando por el derecho al empleo formal; economías que perdieron dinamismo y volvieron a depender masivamente de la exportación de materias primas, ingresando en un cuadro de creciente financiarización del cual no logran salir. Culturalmente, el continente, bajo la fuerte presión de la prensa internacional, revela su incapacidad para retomar los ciclos de creatividad y originalidad que lo caracterizaron en las décadas anteriores.

Dos décadas de aplicación de políticas neoliberales corroyeron las bases de las relaciones sociales sobre las cuales se había edificado el estado latinoamericano: los conceptos de nación y soberanía. Estos se articulaban en torno al objetivo del desarrollo económico –con la industrialización como motor de la integración social– alrededor de un mercado interno nacionalmente estructurado, con relaciones formales de trabajo en expansión y la independencia externa identificada con la expansión del comercio exterior. Estos tres objetivos –desarrollo económico, y mercado interno y externo– fueron las ideas fuerza que impulsaron la remodelación del estado latinoamericano, especialmente en la segunda mitad del siglo XX.

La actual crisis latinoamericana es el resultado de la aplicación de las políticas de desregulación a lo largo de más de una década. Los efectos negativos mencionados anteriormente son la expresión de una crisis de acumulación fuertemente afectada por la financiarización de la economía, resultado de la aplicación de políticas de estabilización esencialmente recesivas. El agotamiento de los modelos de industrialización se dio de forma brusca entre los años 1960 y 1970. Brasil fue la excepción, postergando este agotamiento para fines de la década del setenta, debido a que la dictadura militar supo aprovechar el período expansivo del capitalismo internacional para dar un nuevo empuje a ese ciclo. Sin embargo, la crisis de la deuda, en el pasaje de la década del setenta a la del ochenta, fue general en el continente, provocando el viraje de América Latina hacia un largo ciclo recesivo del que todavía no ha logrado salir.

El estallido del endeudamiento, sumado al pasaje del modelo hegemónico del capitalismo al neoliberalismo, favoreció la hegemonía del capital financiero sobre las economías del continente. La apertura al mercado internacional, la privatización de empresas estatales, la desregulación económica y la flexibilización laboral fueron instrumentos que condujeron a dicha hegemonía, que permeó el conjunto de las economías en detrimento del capital productivo. Las tasas de ganancia obtenidas por las inversiones financieras, sumadas a su liquidez, se convirtieron en el gran polo de atracción que transfirió recursos a la esfera especulativa. Este mecanismo fue particularmente fuerte en América Latina, presionada por el endeudamiento y por los déficits públicos reflejados en el descontrol inflacionario. Frente a una América Latina debilitada, los diferentes horizontes de solución pueden ser resumidos en las dos propuestas de reinserción internacional planteadas: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), renovado, fortalecido y ampliado conforme la propuesta del gobierno de Lula.

## LA CRISIS Y LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

Es imposible comprender los rumbos actuales de América Latina, sus virajes históricos recientes, su crisis presente y sus posibles alternativas, sin considerar la trayectoria de la izquierda latinoamericana. Si inicialmente la izquierda del continente fue tributaria directa del movimiento obrero europeo, generando movimientos con un fuerte componente ideológico y poco enraizamiento en cada país, en el transcurso del siglo XX la izquierda latinoamericana fue ganando en fortaleza y raíces, pasando a protagonizar de forma central los grandes acontecimientos vividos por el continente, especialmente después de las tres primeras décadas del siglo pasado.

Durante el primer período de su historia, la izquierda latinoamericana fue marcada por el surgimiento del movimiento obrero en Europa, con formas de organización sindical elementales y las primeras expresiones partidarias –socialistas y comunistas– en conjunto con el fuerte fenómeno inmigratorio, que trajo al continente las experiencias europeas, especialmente de España, Italia y Portugal. Países como Argentina, por su mayor desarrollo económico relativo, y Chile, por el carácter de su economía minera, fueron protagonistas de las primeras grandes experiencias de masas del movimiento sindical, base social original de la izquierda en el continente.

El impacto de la victoria bolchevique tuvo sus primeros efectos políticos inmediatos en la fundación de los partidos y en la virtual desaparición del anarquismo. El impacto también se tradujo en el surgimiento de dirigentes políticos que, al estilo de los líderes bolcheviques, simultáneamente poseían capacidad de elaboración teórica. El chileno Luis Emilio Recabarren, fundador de los partidos comunistas chileno y argentino, puede ser incluido en este caso; el fenómeno se repetiría más tarde con el peruano José Carlos Mariátegui y el cubano Julio Antonio Mella. Estos tres dirigentes comunistas latinoamericanos correspondieron al perfil tanto teórico como político.

Aunque la mayor parte de las economías del continente era agrícola, las dificultades de organización de los trabajadores del campo, dada la brutalidad de la dominación que mantenía extensamente formas de explotación precapitalistas, motivaron que la izquierda latinoamericana surgiese ligada a los primeros momentos del proceso de industrialización y de la clase obrera urbana, o vinculada a la producción minera. Argentina y Chile son ejemplos claros de tales procesos.

Argentina tuvo una clase obrera que se desarrolló tempranamente durante el siglo XIX, así como formas directamente vinculadas con la industrialización, la urbanización y la inmigración de los trabajadores europeos, tales como un partido socialista. El caso chileno es diferente: caracterizado por una economía minera, produjo enclaves concentrados de trabajadores, donde se desarrollaron las exploraciones mineras de salitre y más tarde de cobre, produciendo polos obreros con organización e ideología clasistas, que detentaban al mismo tiempo la llave de la economía exportadora del país, propiedad de capitales extranjeros –ingleses en el salitre hasta los años veinte, norteamericanos en el cobre desde los años treinta. Esa fuerte tensión explica en parte el carácter violento de las luchas obreras en Chile, con sucesión de grandes movimientos obreros que constantemente desembocaban en masacres.

Las políticas implementadas a partir de los años treinta, que privilegiaron la industrialización y dejaron en un segundo plano la reforma agraria, excepto en México como resultado de las conquistas de la revolución, fueron separando el destino de los trabajadores urbanos del de los trabajadores rurales. Esto aconteció paradigmáticamente con la introducción de los derechos sindicales por parte de Getúlio Vargas en Brasil, restringidos a los trabajadores urbanos, cuando la gran masa de trabajadores brasileños se situaba en el campo, definiendo así un destino diferenciado para ambos y añadiendo una razón

más, además de la ausencia de la reforma agraria, para el éxodo de la masa trabajadora del campo a la ciudad. En Chile, un fenómeno análogo se dio con la anuencia explícita de los partidos socialista y comunista, y de la central de trabajadores dirigida por estos, que en el gobierno del Frente Popular se comprometieron a no llevar a cabo la sindicalización rural en favor de un frente antifascista que congregaría a los propietarios rurales.

Los dos acontecimientos mencionados como una introducción a América Latina en el siglo XX –la masacre de Santa María de Iquique y la revolución mexicana– apuntan a las dos trayectorias más significativas en la constitución de la izquierda latinoamericana como fuerza política. La primera involucró a la naciente izquierda chilena con partidos políticos clasistas, mientras que la segunda mostró el camino para experiencias centradas en las cuestiones nacionales y populares. Chile y Uruguay fueron los ejemplos más claros de movimientos de izquierda en los que los partidos socialista y comunista tuvieron el papel principal, mientras México y Argentina, con el PRI y el peronismo, son ejemplos de predominancia de experiencias nacionales y populares. En un caso, la fuerza del movimiento sindical se expresó políticamente en los partidos socialista y comunista, con su ideología clasista y su programa anticapitalista. En el otro, esa fuerza desembocó en movimientos nacionales populares. Como fue mencionado anteriormente, este fenómeno tiene que ver directamente con la fuerza de las burguesías nativas, por el mayor desarrollo del proceso de industrialización que, en estos dos países, junto con Brasil, produjo liderazgos populares centrados predominantemente en la cuestión nacional por sobre la cuestión social, privilegiada por los partidos comunista y socialista.

Los casos de Argentina y Brasil se diferencian, originando en las décadas siguientes distintos destinos para sus izquierdas, lo que en parte explica las grandes diferencias en las situaciones en que las mismas se encuentran en la actualidad. Getúlio Vargas asumió el gobierno provisorio de Brasil en 1930 como reacción a las políticas primario-exportadoras del bloque en el poder, profundamente afectado por la crisis de 1929. A lo largo de sus años como mandatario, impuso una política de industrialización en cuyo marco reconoció el derecho a la sindicalización de los obreros urbanos, aunque subordinados al Ministerio de Trabajo. Su gobierno estaba ligado a una clase obrera incipiente, producto del bajo nivel de desarrollo industrial del país, acentuado por la crisis económica de 1929 que elevó aún más

los índices de desempleo en Brasil. Por ende, no fue difícil para Getúlio imponer su hegemonía al movimiento obrero, sobre todo porque el Partido Comunista (PC) había criticado y también se había mantenido distante de la revolución de 1930 –un movimiento antioligárquico dirigido por militares de bajo y mediano rango– en nombre todavía de la línea del tercer período de la Internacional Comunista, que predicaba la lucha por el poder basada en alianzas obrero-campesinas. Esta orientación aisló todavía más a los comunistas, facilitando la hegemonía getulista sobre el aún incipiente movimiento de los trabajadores urbanos.

La reacción diferenciada de los países latinoamericanos a la crisis de 1929 fue determinante para que estas fuerzas se constituyesen y se enraizasen en sus respectivos países. De la misma forma en que la crisis fue un desafío para cada país, lo fue también para las respectivas izquierdas. La fisonomía de cada país y de sus izquierdas salió transformada de la crisis y, de alguna manera, condicionó la trayectoria política de estos países en las décadas siguientes. La crisis de 1929, y décadas más tarde el advenimiento de las políticas neoliberales, fueron las pruebas más significativas y determinantes para las fuerzas de izquierda en el continente; funcionaron como filtros que seleccionaron aquellas fuerzas en condiciones de captar los mecanismos históricos que enfrentaban y de presentarse como alternativas.

La segunda etapa histórica transcurre desde 1930 hasta los años ochenta. Es, al día de hoy, el período más importante en la historia de la izquierda y, al mismo tiempo, en la historia de la propia América Latina. En esta etapa los partidos socialista y comunista se constituyen como fuerzas de masas (logro notorio en Chile y Uruguay, y, secundariamente, en Brasil y Colombia, entre otros). También se constituyen en fuerzas de masas el PRI mexicano, con foco en el gobierno de Lázaro Cárdenas en la segunda mitad de los años treinta, el getulismo en Brasil, el peronismo en Argentina y el APRA en Perú, así como sindicatos y centrales sindicales por casi todo el continente.

Este período es introducido por las reacciones a la crisis de 1929, especialmente por la revolución de 1930 en Brasil, la república socialista en Chile y el movimiento que derribó la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, entre otros. Continúa en la década de 1930 con movimientos insurreccionales en El Salvador y Nicaragua, dirigidos respectivamente por Farabundo Martí y Augusto César Sandino, el gobierno del Frente Popular en Chile en 1938, y el gobierno de Lázaro Cárdenas en México.

Estos fenómenos se insertaban en el inestable marco internacional de entreguerras, con regímenes políticos desestabilizados por los temblores provocados por la crisis de 1929, que permitieron a varios países valerse de ella para impulsar procesos de industrialización, y así fortalecer sus clases trabajadoras y expandir los frentes democráticos de lucha contra el fascismo. Dichos frentes, a pesar de haberse traducido en una fórmula gubernamental sólo en el Frente Popular en Chile, tuvieron influencia en el cuadro político de varios países, introduciendo, junto a la temática clasista de los partidos socialista y comunista, la cuestión democrática y, al mismo tiempo, la compleja cuestión sobre la naturaleza de los regímenes y los movimientos nacionalistas latinoamericanos como el getulismo y el peronismo, permitiendo así falsas asimilaciones a los fascismos europeos.

En su segundo ciclo en la posguerra confluyen movimientos como el peronismo y el getulismo, y revoluciones como la boliviana de 1952 y la cubana de 1959, constituyendo el momento de mayor fuerza de la izquierda latinoamericana por los hechos que desencadenaría. El triunfo de la revolución cubana, como dijimos, tuvo más influencias en América Latina que la victoria de la revolución rusa en Europa. Se generalizó el modelo de guerra de guerrillas en un gran número de países: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Si la extensión del campo socialista fortalecía a los partidos comunistas en el continente, su hegemonía en el campo de la izquierda sufrió dos duros reveses. Primero, la escisión entre China y la Unión Soviética, tanto por las denuncias del camino adoptado por esta, como por la pérdida del país más populoso del mundo y el surgimiento de divisiones maoístas dentro de los partidos comunistas que, aunque en general poco expresivas, debilitaban ese campo. En segundo lugar, la victoria de la revolución cubana, revelando que el primer triunfo estratégico en el continente se daba fuera del PC y como alternativa al mismo. El socialismo y la vía insurreccional parecían tornarse el objetivo y la forma de lucha dominantes desde aquel momento.

La victoria de la revolución cubana se transformó rápidamente, pasando del derrocamiento de una dictadura a un régimen que asumía, por primera vez en el continente y en el hemisferio occidental, el socialismo. Esto representó una novedad radical para América Latina. De una distante realidad soviética o china, el socialismo pasó a ser una realidad histórica palpable, pasó a representar una actualidad posible en el momento mismo en que el capitalismo daba muestras de agota-



miento de su ciclo expansivo de industrialización sustitutiva de importaciones en el continente, y las dictaduras militares reemplazaban a las democracias liberales.

Aunque la tentativa de Chile de transición pacífica al socialismo ocurriese más tarde, el triunfo cubano selló la suerte de los partidos comunistas en el continente, y el desenlace chileno vino a confirmar tal situación. La izquierda latinoamericana cerraba así su primera gran etapa histórica, en el marco del pasaje de un capitalismo latinoamericano de expansión a uno con síntomas de agotamiento en su capacidad de seguir creciendo según los moldes del proyecto industrializador original, que también permitió la alianza entre la burguesía industrial, las camadas medias y el movimiento sindical, el inicio del ciclo de dictaduras militares en el Cono Sur del continente, y la victoria de la revolución cubana, así como las influencias que el modelo insurreccional cubano produjo en el conjunto del continente.

Este fue el tercer período de la historia de la izquierda latinoamericana, marcado fuertemente por la influencia del triunfo de la revolución en Cuba. En el marco internacional, tal influencia era fortalecida por una equilibrada relación de fuerzas entre el campo capitalista, liderado por EE.UU., y el campo socialista, liderado por la URSS, en un marco de aparente fortalecimiento de este –por lo menos considerando su expansión– y de debilitamiento de aquel. La guerra de Vietnam, con el desgaste norteamericano y la extensa solidaridad mundial con los vietnamitas; la revolución cultural china o, por lo menos, la versión difundida a gran parte del mundo de lo que sería ese fenómeno; el triunfo argelino en la lucha anticolonial contra Francia; las movilizaciones de la segunda mitad de los años sesenta, particularmente en Francia, Alemania, Italia y México, pero también otras en Japón y Brasil; y la propia muerte del Che Guevara, un duro golpe para los movimientos revolucionarios de América Latina y del mundo, todo esto sirvió de inmediato como elemento fortalecedor del ánimo revolucionario. Al mismo tiempo, los preanuncios de agotamiento del ciclo de mayor crecimiento del capitalismo apuntaban hacia un horizonte de crisis de acumulación.

Fue en este marco que se dieron varios ciclos cortos de lucha armada en el continente, siempre teniendo como referencia la Revolución Cubana como modelo vencedor. El primero incluía a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Perú y Guatemala, básicamente, con un modelo de guerrilla rural bastante similar al cubano, por lo menos en su codificación según los textos del Che y Régis Debray. Este fue

derrotado, pero retomado enseguida, según moldes similares, en Guatemala, Perú y Venezuela, sumándose nuevamente modalidades de guerrilla urbana en Uruguay, Argentina y Brasil, además de Colombia, con formas urbana y rural, y en México, en el campo.

Los dos ciclos fueron duramente derrotados, en plazos relativamente cortos, a lo largo de las décadas del sesenta y setenta, en gran medida porque perdieron el factor sorpresa, que había sido importante en el caso cubano, y también por la reiteración mecánica de la experiencia de Cuba en los casos de guerrillas rurales. En la otra modalidad, la derrota se produjo por la incapacidad de resolver los *impasses* de la guerrilla urbana, al trasladar a los centros de dominación político-militar formas de acumulación de fuerza típicas de la guerrilla rural, acelerando así enfrentamientos en condiciones desfavorables, aun cuando se lograron niveles importantes de acumulación de fuerzas en Uruguay y Argentina.

Aun así, en los países con una estructura económico-social e incluso formas de dominación política más similares a las cubanas –aquellos de América Central–, se dio un tercer ciclo de lucha armada a lo largo de los años setenta, en particular en la segunda mitad en Nicaragua, cuya victoria en 1979 alentó la extensión de procesos similares en Guatemala y El Salvador. La victoria sandinista estuvo estrechamente articulada a la derrota norteamericana en Vietnam y a la crisis interna del gobierno de Nixon, que acabaron generando la incapacidad de EE.UU. para emprender una nueva intervención externa, factor que sustituyó la sorpresa del caso cubano. La derrota de Jimmy Carter, que representaba la asimilación de los golpes sufridos por EE.UU., y la reconquista de la ofensiva político-militar norteamericana con la victoria de Ronald Reagan en 1980, alteraron ese cuadro, lo que acabaría siendo decisivo para el fracaso sandinista y la inviabilidad de nuevas victorias de la guerrilla en Guatemala y El Salvador, determinando el reciclaje de los movimientos guerrilleros de los dos países en la lucha institucional (sobre todo después de la desaparición de la URSS), y cerrando así los ciclos de lucha insurreccional en América Latina. Colombia tiene una trayectoria propia, anterior a los ciclos mencionados, desde la guerra civil desatada por el Bogotazo de 1948, que se desarrolla a lo largo de los años cincuenta, como una continuación por parte la izquierda –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– del acuerdo de unión nacional de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, protagonistas de la guerra civil, que desde entonces pasaron a cogobernar juntos el país.

La experiencia chilena de tentativa de transición institucional al socialismo es un caso particular, que se da a contramano de las tendencias y la correlación de fuerzas en el continente y en especial en la región del Cono Sur, lo que acabaría constituyéndose en uno de los factores de su fracaso –su aislamiento y cerco regional. Chile fue una especie de laboratorio de experiencias políticas en América Latina, adaptando al continente la expresión de Friedrich Engels para Francia. Su movimiento obrero comenzó relativamente temprano porque, siendo una economía primario-exportadora que producía y exportaba minerales, desarrolló al mismo tiempo una clase obrera ya a fines del siglo XIX, que protagonizó grandes luchas obreras a lo largo de todo el siglo XX.

Fue así que Chile tuvo una clase obrera antes que una burguesía industrial. Tuvo centrales sindicales y partidos socialista y comunista participando directamente en el gobierno del Frente Popular ya en los años treinta. Fue el país que protagonizó la tentativa de experiencia alternativa a la revolución cubana promovida por EE.UU. por medio de la Alianza para el Progreso –el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei en los años sesenta. Y finalmente –y, por consiguiente, no por casualidad– fue escenario de la única experiencia política de transición institucional al socialismo en el mundo, con el gobierno de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973.

Fue un desarrollo único en el continente, quizá solamente comparable al de Uruguay, con el que compartió una larga tradición democrática. Uruguay adoptó la jornada de 8 horas de trabajo un año antes que EE.UU., tuvo la ley de divorcio setenta años antes que España y el voto femenino catorce años antes que Francia, y abolió los castigos corporales ciento veinte años antes que Gran Bretaña (Galeano, 2002).

Chile eligió a través de elecciones todos a sus presidentes entre 1830 y 1970, con excepción de 1891 y del período 1924-1931. Se desarrolló en ese país un Congreso antes que en los países europeos, salvo Inglaterra y Noruega. La participación electoral en Chile hacia mediados del siglo XIX era equivalente a la existente en la misma época en Holanda, lo que Inglaterra había conseguido apenas veinte años antes y que Italia sólo tendría veinte años después. Chile implantó el voto secreto en 1874, antes de que eso ocurriese en Bélgica, Dinamarca, Noruega y Francia. Y tuvo partidos que participaron en las tres Internacionales obreras. Y fue el único país, además de Francia y España, que tuvo un gobierno de frente popular.

Chile vivió esa tradición democrática de alternancia. Tuvo gobiernos de frente popular, con los partidos radical, socialista y comunista, a fines de los años treinta; un gobierno populista militar liderado por el general Carlos Ibáñez, apoyado por Perón, en los años cincuenta; un gobierno conservador, otro demócrata cristiano, y finalmente un gobierno socialista-comunista.

No fue por azar, por tanto, que Chile se transformó en el escenario de una tentativa de transición del capitalismo al socialismo por la vía institucional. Tal era la confianza en la democracia del país, en el derecho a la alternancia en el gobierno: en décadas anteriores, cuatro gobiernos con principios ideológicos diferenciados se habían sucedido en el gobierno sin rupturas institucionales. La izquierda chilena fue tributaria de esa visión y apostó fuertemente a una transición institucional, incluso con una victoria electoral en la que obtuvo poco más de un tercio de los votos, faltando medir el carácter profundo de la transición propuesta que implicaba la estatificación de los ciento cincuenta mayores monopolios del país, así como la nacionalización de las minas de cobre, la fuente fundamental de divisas para el país, en manos de capitales norteamericanos.

Su derrota cerró la trayectoria de los partidos comunistas en el continente, que por décadas habían predicado, en grados variados, el camino que la izquierda chilena intentó poner en práctica. En los años setenta, la izquierda latinoamericana vio a sus principales escenarios trasladarse del Cono Sur a América Central, avanzando sin un balance que permitiese incorporar experiencias y readaptar caminos y formas de lucha.

La imagen de la izquierda en el continente era, en 1990, la de mayor fragilidad desde que esta surgió en el escenario político latinoamericano en las primeras décadas del siglo XX. Los movimientos armados habían sido duramente derrotados en prácticamente todos los países donde se habían desarrollado, vencidos por duras ofensivas represivas y regímenes dictatoriales, desapareciendo de la escena política. El régimen sandinista se había agotado y había sido derrotado en las urnas en 1990. Los partidos comunistas –incluso aquellos que habían sido tradicionalmente más fuertes, salvo el cubano y los partidos comunistas de Chile y Uruguay– fueron reducidos a la impotencia, debilitándose igualmente las centrales sindicales dirigidas o hegemónicas por estos. Algunos llegaron al punto de cambiar su nombre y perder su carácter, como en el caso del PC brasileño. Todo sucedió de forma bastante paralela a lo ocurrido con los partidos comunistas de

Europa occidental, demostrando cómo el fin de la URSS había sido un factor decisivo para su decadencia. Las organizaciones sindicales como un todo se debilitaron bajo el impacto de las políticas recesivas de ajuste fiscal y flexibilización laboral, que en su conjunto promovieron la precariedad de las relaciones de trabajo para la mayoría de los trabajadores del continente.

Los partidos socialistas y socialdemócratas, así como los movimientos y partidos conocidos como populistas y nacionalistas, se reciclaron, también de forma paralela al fenómeno europeo, hacia políticas neoliberales. El peronismo, el PRI mexicano, el Partido Socialista Chileno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la AD en Venezuela, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia, son claros ejemplos de tal proceso. Con esto ayudaron a aislar todavía más a los partidos comunistas y otras fuerzas de izquierda más radicales, desecharon sus tradicionales políticas de regulación estatal de distribución de renta, y se tornaron responsables por la extensión del neoliberalismo en el conjunto del continente, abandonando el ya debilitado campo de la izquierda.

Un movimiento específico, típico del período de derrota de la izquierda, fue la tentativa de creación de un eje para una tercera vía latinoamericana, a través del llamado Consenso de Buenos Aires. Mediante un documento redactado por el cientista político brasileño Roberto Mangabeira Unger, radicado en EE.UU., y por quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda, se pretendía constituir una alternativa entre la izquierda tradicional considerada estatista y las fuerzas neoliberales. El movimiento correspondía al segundo flujo del neoliberalismo, liderado por los gobiernos de Tony Blair y Bill Clinton desde el centro del capitalismo. El documento final fue firmado por dirigentes que luego asumieron los gobiernos de sus países, como el chileno Ricardo Lagos, el mexicano Vicente Fox y el argentino Fernando de la Rúa, y por el candidato a la presidencia de Brasil, Ciro Gomes, que no fue elegido. El movimiento parecía así lanzando al éxito, frente la crisis de la izquierda, las señales de agotamiento del primer ciclo neoliberal, y el protagonismo de Clinton y Blair a escala mundial.

Cuba, sucesivamente, una referencia central para la izquierda del continente, fue particularmente afectada por la desaparición del campo socialista. El régimen cubano logró sobrevivir, a diferencia de los regímenes del Este europeo y de la propia URSS, demostrando cómo la legitimidad conseguida por las conquistas de la revolución

cubana era de una calidad diferente a la de aquellas de los regímenes del Este europeo, resultantes de la llegada de las tropas soviéticas que derrotaron la ocupación nazi. Sin embargo, el precio pagado por el régimen cubano fue alto, al quedarse fuera de la integración internacional a la planificación del campo socialista, que le permitía obtener petróleo, entre otros bienes estratégicos, a cambio de azúcar, cítricos y níquel. Los golpes fueron muy duros e hicieron que el régimen cubano pasara por sus peores momentos entre los años 1989 y 1994. Para superar relativamente la crisis, el gobierno cubano produjo un drástico viraje en su política económica permitiendo la actividad privada en áreas hasta ese momento reservadas al sector estatal, a excepción de la educación y la salud, así como tolerando un área de circulación del dólar y expandiendo los contratos con empresas extranjeras en el país.

Como resultado de la nueva política, en la cual Cuba se propone el objetivo de no retroceder ni avanzar en la construcción del socialismo, debido al cambio negativo en la correlación de fuerzas internacional con su efecto directo sobre la economía del país, la isla dejó de ser un referente alternativo para la izquierda del continente. Se mantiene la solidaridad con Cuba frente al bloqueo norteamericano, pero la experiencia deja de ser un horizonte para el movimiento popular latinoamericano, ya sea como sistema político o como modelo socioeconómico.

El campo de la izquierda quedó compuesto por remanentes de las fuerzas que sobrevivieron al período anterior (particularmente partidos comunistas debilitados), por movimientos sociales, incluso centrales sindicales que resistieron al neoliberalismo, y por algunas fuerzas *sui generis* que protagonizaron las principales luchas políticas en el plano institucional –el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, el Frente Amplio (FA) en Uruguay y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil–, además del caso particular del PC de Cuba. Todas estas son fuerzas de diversas procedencias: el PRD es resultado de la fusión entre una escisión del PRI y otras fuerzas de izquierda, incluido el PC; el FMLN es el frente reconvertido de la lucha armada a la lucha institucional; el FA es la continuación del frente de los grupos de la izquierda uruguaya que desde los años sesenta protagoniza la lucha institucional en el país; y el PT es originario de los movimientos sociales en Brasil, que se organizaron como partido político en 1980. Aunque con orígenes distintos, estas cuatro fuerzas tienen varios elementos en común, herederas como son de las luchas de

la izquierda institucional en el continente, ya sea en su programa de luchas democráticas de reforma o en las formas organizativas. Todas forman parte, junto a las otras fuerzas de la izquierda en el continente, del Foro de São Paulo, espacio de encuentro, intercambio de experiencias y debates, que se reúne periódicamente, desde mediados de los años ochenta, en varios países del continente. Lleva ese nombre porque su primera reunión fue en São Paulo.

## AMÉRICA LATINA EN LA HORA DE LULA

Brasil se había transformado en el eslabón más frágil de América Latina, por combinar factores económico-sociales explosivos con una acumulación de fuerzas del movimiento popular en los planos social y político superior a la de los otros países del continente desde los años ochenta. Comparativamente, era el país más atrasado de la región en el desarrollo socioeconómico y en la construcción de fuerzas políticas.

Brasil fue favorecido por el “privilegio del atraso” –categoría utilizada por Trotski– al revertir las condiciones que lo desfavorecían. Entre el golpe militar de 1964 y el final de la dictadura se estructuraron una nueva izquierda y un nuevo movimiento social, mientras que otros países con izquierdas y movimientos populares más fuertes –como Chile, Argentina y Uruguay– experimentaron golpes relativamente más tarde dada esa mayor fuerza, pero también, por eso mismo, fueron víctimas de represiones más duras.

Como resultado, Brasil se desarrolló más en términos industriales durante la dictadura militar, sin resolver la cuestión agraria y sin superar su significativamente peor distribución de la renta. La izquierda se fortaleció en un marco social que mantenía sus fragilidades. El PT, la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) son productos directos de esa combinación, que terminó agudizando más las contradicciones en Brasil que en los otros países de la región.

La elección de Lula –como él mismo constató en su discurso de toma de posesión– es el resultado de un largo proceso histórico que desemboca en el primer presidente de izquierda elegido en el país. Su victoria abre un nuevo período en América Latina, cualquiera que sea el destino de su gobierno, porque representa la elección de un candidato y de un partido que proponen, por primera vez en el continente, la ruptura con el modelo neoliberal puesto en práctica en Brasil en la década anterior.

América Latina ingresó al siglo XXI viviendo su peor crisis en setenta años como resultado de las políticas neoliberales que fragilizaron sus economías, debilitaron sus estados y disminuyeron su peso económico y político en el mundo. El proyecto norteamericano del ALCA y los acuerdos bilaterales de libre comercio entre EE.UU. y varios países del continente –Chile, Guatemala, El Salvador– significaron una todavía mayor expansión de la capacidad hegemónica norteamericana sobre el continente, debilitando sus márgenes de soberanía.

La crisis del continente, el pasaje de la economía norteamericana a la recesión y el cambio de discurso de EE.UU., privilegiando la militarización de los conflictos mundiales, produjeron un espacio de liderazgo regional que se había estrechado considerablemente en el período anterior, por la adhesión de prácticamente todos los gobiernos del continente a las políticas de libre comercio y desregulación económica. La crisis argentina fue el caso límite en términos de retroceso económico y social y, al mismo tiempo, de ausencia del discurso de EE.UU. Fue la primera aplicación de la nueva política que el gobierno de Bush adoptó y logró que el FMI hiciese suya: los países deberían quebrar, así como las empresas, sin que el organismo internacional asumiera ninguna responsabilidad en relación con la crisis. Tal actitud condujo a la Argentina, después de haber aplicado de la forma más rigurosa las políticas del FMI, a entrar en la peor crisis económica y social que un país haya vivido en el período histórico reciente del capitalismo, sin ningún socorro de los organismos internacionales.

La combinación entre estas condiciones internacionales y el agotamiento del modelo neoliberal, más clara en América Latina debido a la aplicación más profunda y generalizada de tales políticas en el continente, engendró una crisis hegemónica, de la cual las victorias electorales de Hugo Chávez en Venezuela, Lula en Brasil y Lucio Gutiérrez en Ecuador –además del favoritismo del Frente Amplio en las elecciones generales de Uruguay en 2004– son una expresión.

Los datos son claros: hubo un aumento de nueve puntos porcentuales en la tasa de pobreza de la región, de 35% en 1982 a 44% en 2002, y de cinco puntos en la tasa de indigencia, de 15% a 20%, en ese mismo período, justamente aquel marcado por la aplicación generalizada de las políticas de ajuste fiscal y desregulación económica. El continente pasó a vivir la peor crisis de desempleo, iniciada en 1995, año de la crisis mexicana, llegando a cerca de 10%, implicando a un total de 18 millones de personas. En Argentina, por ejemplo, el desempleo pasó de 7,5 en 1990 a 21,5% a inicios de 2002. Un 45% de la



población de la región –45 millones de personas– carecía de un empleo decente en 1990, porcentaje que ascendió a 50,5%, esto es, 53 millones de habitantes. De cada diez empleos creados en este período, siete integraban el sector informal, en el cual apenas dos de cada diez empleados tienen acceso a beneficios sociales.

En su primer gobierno, el ex presidente norteamericano Bill Clinton ni siquiera cruzó el Río Grande para constatar cómo estaba funcionando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en México. El continente parecía adecuarse plácidamente a las propuestas neoliberales, mientras el gobierno de Clinton disfrutaba la luna de miel producto de la combinación de la desaparición de la URSS, la victoria liberal en los países del Este europeo y la reconquista del crecimiento en la economía norteamericana.

Durante su segundo mandato, en la segunda mitad de los años noventa, Clinton tuvo que convivir con una transición a crisis generales en el continente, aún manifestadas a nivel nacional: la crisis brasileña de 1999; la degradación general de Argentina; las crisis institucionales en Ecuador, Bolivia y Paraguay; y la elección de Hugo Chávez en Venezuela. La herencia que él deja a su sucesor es un mapa del continente como un mar de crisis, por donde sea que se lo mire: desde Haití hasta Uruguay, desde Guatemala hasta Perú.

La crisis latinoamericana, con sus especificidades nacionales, sólo puede ser entendida en el marco de la aplicación generalizada de las políticas neoliberales en las dos décadas anteriores. De otra manera, nada explicaría la concomitancia de las crisis. La explosividad social de los distintos países y la propia debilidad de las formaciones políticas para enfrentar la crisis son productos típicos de la aplicación de aquellas políticas. Sus modalidades específicas de aplicación permiten entender sus formas y temporalidad particulares.

Los principales epicentros actuales de la crisis son Colombia, Venezuela, Argentina y los países andinos, Ecuador, Bolivia y Perú. Colombia arrastra una crisis profunda desde hace varias décadas. El fin de la guerra civil desatada a fines de los años cincuenta por un acuerdo político entre los dos principales partidos –el liberal y el conservador– significó la pacificación entre los mismos, pero nunca alcanzó al conjunto del país, especialmente en el campo, escenario privilegiado de los conflictos armados. El país pasó a vivir esquizofrénicamente entre un sistema político institucionalizado, que convivía con índices del 70% de abstención, y guerrillas rurales originarias de aquella guerra, como las FARC, u otras surgidas posteriormente, como el

Ejército de Liberación Nacional (ELN). Más adelante se introdujo otro elemento, el narcotráfico, que desde el comienzo organizó fuerzas paramilitares para combatir a los grupos guerrilleros con la connivencia de las fuerzas armadas.

Cuando el narcotráfico ganó proyección nacional –mostrando cómo había penetrado profundamente en el aparato de estado–, y debido a la presión de los sucesivos gobiernos de EE.UU., los presidentes colombianos pasaron a actuar en contra de este y de la guerrilla al mismo tiempo. La política norteamericana de exportar sus problemas busca, en la erradicación de las plantaciones de hojas de coca y en el combate a los narcotraficantes, la solución para una dificultad interna, el consumo de drogas por parte del mercado más rico del mundo. Al hacer esto, EE.UU. desvía la atención de su escenario interno y, al mismo tiempo, encuentra pretextos para situar fuerzas militares en una zona estratégica para sus planes expansionistas, la zona andino-amazónica.

La nueva doctrina de EE.UU. privilegia a Colombia como uno de los epicentros de la “guerra contra el terrorismo”, junto con Palestina. Son países en los que el gobierno de Bush cree encontrar “en estado puro” al “terrorismo”, un “terrorismo” ante el cual no debería ceder aceptando negociaciones, pues ello representaría un triunfo y un incentivo para este. De esta forma, la modalidad de guerra que EE.UU. pone en práctica, junto con el gobierno colombiano, es la “guerra de exterminio”, de destrucción de las fuerzas insurgentes, tal como ocurre con los palestinos. Se trata, por tanto, de un foco de guerra deflagrado, abierto, cuyo desenvolvimiento depende del triunfo de la estrategia norteamericana a escala internacional, del suceso de políticas alternativas de integración continental, y de la capacidad local de las fuerzas opositoras para ganar amplios sectores populares que se opongan a la solución violenta de la crisis.

La crisis venezolana tiene otro origen y otro carácter. Venezuela, por varias razones, nunca tuvo un programa neoliberal efectivamente puesto en práctica. Cuando Carlos Andrés Pérez, del entonces partido socialdemócrata AD, fue electo por segunda vez, en 1989, hizo algo análogo a Carlos Menem en Argentina, anunciando al día siguiente de su toma de posesión del cargo un programa neoliberal, en oposición a la tradición de su partido y a su propia campaña electoral. El resultado fue una enorme manifestación popular conocida como Caracazo, que fue reprimida violentamente, con el balance oficial de cuatrocientos muertos. El gobierno estaba condenado al fracaso desde su inicio,

hecho que fue capitalizado por el levantamiento militar liderado por Hugo Chávez. Condenado poco después por corrupción, Carlos Andrés Pérez vio interrumpido su programa, de forma similar a Fernando Collor en Brasil.

Fue sucedido por otro ex presidente, del otro partido tradicional, el COPEI, de origen demócrata-cristiano, Rafael Caldera, que intentó fórmulas heterodoxas de ajuste fiscal, apoyado en un ex guerrillero, Teodoro Petkoff, que pretendía, de alguna forma, ser el Fernando Henrique Cardoso de un gobierno que podría ser comparado con el de Itamar Franco en Brasil. La nueva tentativa también fracasó, y Hugo Chávez capitalizó el descontento por el desempeño de las elites venezolanas en décadas anteriores que protagonizaron la “farra del petróleo”, desperdiciando los altos precios del combustible en detrimento de lo que habría podido ser un incentivo para la industrialización y el bienestar del país. Contrariamente, en gran medida, la corrupción explica el hecho de que Venezuela haya continuado siendo un país petrolero, con las oscilaciones que tal circunstancia produce en la economía del país.

Hugo Chávez triunfó con el voto de los marginados sociales y los críticos a los partidos tradicionales, logró aprobar por plebiscito una nueva Constitución, reformó los órganos de Justicia y obtuvo mayoría parlamentaria. Su política se basó en la reorganización de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), favorecida por el aumento de los precios del petróleo, con lo que promovió políticas sociales dirigidas a las clases populares, sin alterar, no obstante, la estructura de poder interna del país, tanto el poder autonomizado de la empresa estatal de petróleo como los grandes monopolios privados, comenzando por el de los medios de comunicación. Su política económica se basó en el ajuste fiscal, pero, mientras los precios del petróleo lo favorecieron, sus políticas sociales tuvieron un papel redistributivo relativamente eficaz.

No pasó mucho tiempo hasta que las políticas de sabotaje externo e interno surtieron efecto, entre ellas la tentativa de golpe de abril de 2002, la fuga sistemática de capitales, el desabastecimiento y el *lock out* de diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, incluyendo la interrupción de la producción de petróleo. El golpe fue evitado no por el apoyo de la alta oficialidad que había acompañado a Chávez en su llegada al gobierno, sino por la baja oficialidad, y sobre todo por la movilización de un emergente movimiento popular que se daba cuenta de que sería la principal víctima del golpe.

La corrida pasó a ser contra el tiempo. La oposición buscaba derribar a Chávez antes de que la situación latinoamericana se le tornara favorable, antes de que la nueva ley del petróleo recuperara para el gobierno buena parte del 80% de los *royalties* que se llevaba la tecnocracia de la empresa, y antes de que la nueva ley de tierras contra la especulación urbana y el latifundio rural entrara en vigor. Y, además, antes de que el nuevo movimiento de masas pudiera constituirse en una fuerza orgánica suficiente para contrabalancear el poder de los medios de comunicación y la opinión pública formada por estos. Esta corrida es la que deja abierto el proceso venezolano, dependiendo de la evolución política del proceso de integración sudamericana del MERCOSUR, liderado por Brasil y Argentina, del destino de la política guerrera de la administración Bush y de la situación de disputa política y social interna.

La Argentina fue un país que vivió situaciones extremas –de alguna forma sucedió a Chile como laboratorio de experiencias políticas latinoamericanas– desde el fracaso de la dictadura militar surgida del golpe de 1966 y la transición de retorno a la democracia liberal, con la esperada victoria electoral del peronismo. Esta última, sin embargo, se mezcló con otro fenómeno en ascenso en aquel momento en el continente y, en particular, en el Cono Sur: las guerrillas urbanas, también presentes en Uruguay y Brasil.

El peronismo triunfó incorporando tanto sectores de extrema derecha, que siempre habían estado presentes en su seno, esta vez articulados con sectores de las Fuerzas Armadas, representados por López Rega y la Triple A, como grupos guerrilleros, de los cuales Montoneros fue la expresión más fuerte, incluyendo gran parte del empresariado nacional y, particularmente, el entonces fuerte movimiento sindical organizado.

El golpe militar que en 1976 terminó con el fracasado retorno del peronismo fue el modelo más acabado de un régimen de terror contra el movimiento popular y contra cualquier resquicio democrático sobreviviente, golpeando profundamente la capacidad de organización y de expresión social y política. La también frustrada transición democrática dirigida por los radicales, que incluyó dos crisis de hiperinflación, desembocó en el retorno de los peronistas, esta vez como agentes de políticas neoliberales, con Carlos Menem. Después de haber prometido un *shock* productivo, apenas Menem asumió el poder entregó las riendas de la economía a los economistas liberales más tradicionales, adversarios históricos del peronismo, hasta llegar al esquema de la

paridad cambiaria puesto en práctica por Domingo Cavallo, forma extrema alcanzada por la prioridad dada a la estabilidad monetaria, en un país traumatizado por el régimen del terror político y las hiperinflaciones. Fue entonces, en manos de la fuerza partidaria tradicional representativa del movimiento obrero, que se implantó el neoliberalismo en Argentina, en una modalidad también pionera.

La crisis actual que enfrenta el país es una consecuencia de la extensión de la crisis desencadenada por la solución artificial que la paridad cambiaria adoptada representó para Argentina.

Nunca antes un país retrocedió tanto fuera de tiempos de guerra. Lo que había sido un paradigma para el FMI y el BM se transformó en su opuesto, como una consecuencia inevitable de haber adoptado de forma tan ortodoxa las políticas de los organismos internacionales.

Los países andinos, en particular Ecuador, Bolivia y Perú, representaron, a lo largo de los últimos años, los mejores ejemplos de crisis estructural en países para los cuales el mercado internacional, reorganizado según los moldes de las políticas neoliberales, no deja lugar, relegándolos a la situación de sus pares centroamericanos, con economías primario-exportadoras totalmente dependientes del mercado de EE.UU. La particularidad de estos países es la presencia de un movimiento de masas de origen rural cuyo eje es el movimiento indígena.

La ineficacia de las políticas neoliberales puestas en práctica a lo largo de las dos últimas décadas profundizó la crisis social existente, sin haber conseguido retomar el desarrollo ni conquistar la estabilidad política, y generando además una serie de crisis institucionales que marcan la historia política reciente de estos países como reflejo de una profunda crisis hegemónica. Ecuador, que no pudo contar con una experiencia relativamente prolongada como aquella de Fujimori –consolidado en el poder por la estabilidad monetaria, pero también por el éxito en el combate a las guerrillas–, ni con una cierta estructura partidaria sobreviviente como la de Bolivia –Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), MIR– ni la dirección política de Hugo Banzer, reflejó de forma más directa esta inestabilidad económica, social y política, con la sucesión de presidentes electos y depuestos, la dolarización, y la elección de Lucio Gutiérrez como presidente con el apoyo del movimiento indígena, que por primera vez en la historia del país tuvo participación directa en el gobierno.

El siglo XXI encuentra a América Latina frente a alternativas contradictorias en un cuadro internacional complejo. Por un lado, un

marco mundial de fuerte hegemonía norteamericana, aunque no basada en su capacidad de expansión económica: por el contrario, agotado, el ciclo expansivo de la economía de EE.UU. fue sustituido por un ciclo recesivo, con la consecuente restricción del comercio internacional y de las demandas provenientes de los mercados centrales del capitalismo. EE.UU. busca protegerse, extendiendo su hegemonía en el continente a través de la propuesta del ALCA, lo que le posibilitaría expandir el poderío económico de sus corporaciones sin contrapesos, como ya ocurre en América del Norte con el TLCAN.

Los dilemas internos de cada país de América Latina –prolongar el modelo de ajuste fiscal o romper con el neoliberalismo y buscar un modelo alternativo– se expresan en el plano regional por la disyuntiva entre el ALCA y el MERCOSUR. El primero es la secuencia lógica de la aplicación de las políticas de apertura de las economías nacionales en esta región del mundo, en un momento en que grandes zonas de integración de las mayores economías del planeta están siendo articuladas y en que pocas monedas podrán resistir a escala internacional. La propuesta de integración continental bajo la égida de la mayor economía del mundo, en el marco de su propia moneda, parece el complemento natural para las políticas practicadas en las dos últimas décadas en el continente, de las que el TLCAN es una expresión regional. América Latina en la hora de Lula significa el arreglo de cuentas de la izquierda latinoamericana con su propia trayectoria a lo largo de los últimos años. Por eso el año 2003 es tan importante para la izquierda y para el continente como lo fue el año 1973, tres décadas atrás. En ese momento, con los golpes militares en Chile y Uruguay, se terminó un ciclo histórico de avances y tentativas políticas de construir alternativas al capitalismo dependiente en crisis, cerrando el cerco sobre lo que sería el nuevo gobierno peronista en la Argentina, hasta que el golpe de 1976 dejó definitivamente consolidado el nuevo período contrarrevolucionario en la región.

El año 2003 puede constituir el inicio de un nuevo período histórico para el continente o del agotamiento de un modelo y, con él, de las fuerzas que, en oposición al mismo, no supieron cómo o no fueron capaces de superarlo. Los primeros indicios no son auspiciosos: la fase inicial de los gobiernos de Lula y Lucio Gutiérrez da más la impresión de continuidad que de ruptura. Los violentos acontecimientos que marcan el inicio del gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia revelan cómo sociedades extremadamente agotadas por la elevación brutal de los niveles de explotación y expropiación de derechos ya no soportan un nuevo ciclo de ajustes recesivos.

Y, sin embargo, parece que justamente es esto lo que los nuevos gobiernos, ahora con apoyo de los movimientos sociales y en nombre de la izquierda, señalan como una transición para la salida del modelo o para su renovación. Cuando Lula fue electo, el semanario británico *The Economist* tituló su editorial “Will he finish the job?” (“¿Terminará él el trabajo?”), refiriéndose a la complementación de las “reformas” llevadas a cabo por Fernando Henrique Cardoso, de la misma manera en que Tony Blair, también electo contra el modelo neoliberal, hizo con Margaret Thatcher. En poco tiempo, esta esperanza de la derecha y los temores de la izquierda parecen encontrar respaldo, cuando miembros del nuevo gobierno brasileño presentan reformas a los regímenes jubilatorio y tributario como sus primeros pasos, como formas de conquistar índices de mercado favorables y así, al disminuir el denominado “riesgo Brasil”, conseguir bajar las tasas de interés y pasar del actual círculo vicioso heredado del neoliberalismo a un círculo virtuoso. Además, miembros de ese gobierno reivindican para sí el “coraje” de cumplir las “reformas” que Fernando Henrique Cardoso fue incapaz de realizar, como confirmando que el paquete de reformas está realmente convirtiéndose en la denominada “segunda generación” de “reformas” propuestas por el Banco Mundial.

Todo confirma que el año 2003 se ha convertido en un año decisivo para América Latina y su izquierda. La dirección que asumirá la historia latinoamericana en el nuevo siglo empieza a ser decidida desde este momento.

## BIBLIOGRAFÍA

- Castañeda, Jorge 1994 *Utopia desarmada* (São Paulo: Companhia das Letras).  
Galeano, Eduardo 2002 *O teatro do bem e do mal* (Porto Alegre: L&PM).